

~~144-ciento cuarenta y cuatro~~
~~140-ciento cuarenta y cuatro~~
144-ciento cuarenta y cuatro

SEÑORES JUECES DE SALA CIVIL Y MERCANTIL DE CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:

Leticia Soriano de Guerrero, p.l.q.r. de Pablicorp en el juicio N° 641-2012, juicio ordinario que sigo contra Fideicomiso Sorrento y otros, a ustedes digo:

ACCION EXTRAORDINARIA DE PROTECCION

1.- CALIDAD EN QUE COMPARECE LA ACCIONANTE.- La calidad en que comparece la accionante en esta acción constitucional extraordinaria de protección es como Presidenta Ejecutiva de la compañía Pablicorp S.A. según los documentos justificativos que obran de autos; calidad justificada en la acción extraordinaria de protección anterior que resolvió la Corte Constitucional en la sentencia de 08 de marzo de 2012.

2.- CONSTANCIA QUE LA SENTENCIA ESTA EJECUTORIADA.- La Sala Civil de Corte Nacional dicto sentencia de casación de 26 de abril de 2013, y resuelve la solicitud de aclaración en auto de 12 de mayo de 2013, el que se halla ejecutoriado por el ministerio de la ley. Por tanto, se encuentra ejecutoriada la sentencia de la Corte Nacional de Justicia.

3.- DEMOSTRACION DE HABER AGOTADO LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.- En esta causa demostrar agotado los recursos ordinarios y extraordinarios resulta redundante porque la Corte Constitucional dicto sentencia en esta causa y dispuso que la Corte Nacional de Justicia resuelva el recurso de casación nuevamente procurando evitar las violaciones a la tutela judicial efectiva, a las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica; pero todo fue vano, porque el fallo es peor que el anterior. En este juicio se agotan 5 instancias: la 1ª. Juez 9 Civil; la 2ª. ante la 2ª. Sala Civil de Corte Superior; la 3ª. ante la Sala Civil y Mercantil de Corte Nacional; la 4ª. ante la Corte Constitucional; la 5ª. ante Sala Civil de Corte Nacional; y la 6ª. que corresponde a la Corte Constitucional. Por tanto, éste juicio viola los principios constitucionales de administración de justicia que garantiza la celeridad, la simplificación, la economía procesal y otros, son letra muerta, es sencillamente interminable.

★

4.- SEÑALAMIENTO DE LA SALA O TRIBUNAL DEL QUE EMANA LA DECISION VIOLATORIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.- La decisión violatoria del derecho constitucional emana de la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia integrada por los doctores Paulina Aguirre Suárez, Paúl Iñiguez Ríos, Oscar Enríquez Villarreal, Jueza y Jueces de la Sala de Casación civil de la referida Corte Nacional de Justicia.

5.- IDENTIFICACION PRECISA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL VIOLADO EN LA DECISION JUDICIAL.-

5.1. La sentencia de casación de 26 de abril de 2013 de la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia, es la misma tesis sostenida por el defensor de la señora María Brito de Whitman, que la defiende desde hace 18 años, tras bastidores, pretende ocultar su rostro para hacer creer que no patrocina esta causa, porque sabe que es un atraco. La tesis que sostuvo desde el principio es la misma, que solo mueve a risa por lo ridícula, pues no tiene un solo vestigio de juridicidad. ¡Pero, los señores jueces nacionales son los que tienen que resolver y se supone que ellos conocen el Derecho en su larga carrera judicial, que debían resolver sobre los méritos del proceso, la Constitución y la Ley! ¡Que pudo haber ocurrido.¡ De pronto pudo haber ocurrido que no se sacaron la venda para resolver y le metieron gato por liebre!

5.2. Los jueces nacionales valoran la sentencia de Corte Constitucional de modo sui generis y no prevista en los Arts. 440 de la Constitución de la República y 4° Disposición Transitoria de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en otras palabras dieron el valor de una sentencia de Corte Provincial, que faculta a jueces a dejarla sin eficacia legal. Citaré un ejemplo, la sentencia constitucional en dos parte de la motiva de la decisión declara específicamente que el remate es consecuencia de un supuesto conflicto colectivo de trabajo, por una supuesta obligación cubierta con el inmueble de propiedad de Pablicorp. Estos temas, los jueces nacionales, tenían que analizarlos a la luz del derecho, de las tablas procesales, esto es, debían estudiar el juicio laboral y desvirtuar que el conflicto colectivo de trabajo no es supuesto sino autentico y conforme a derecho; debían estudiar el acta transaccional suscrita por la ex mandataria, para demostrar que tenía capacidad y

~~145-ciento~~ ~~141-ciento~~ ~~141-ciento~~ ~~141-ciento~~
145-ciento ~~141-ciento~~ ~~141-ciento~~ ~~141-ciento~~
UNCO ~~141-ciento~~ ~~141-ciento~~ ~~141-ciento~~

derecho para suscribirla y facultad en la ley para obligar a la empresa, dado que se le imputó no tener vínculo jurídico con Pablicorp por haber perdido el juicio de la titularidad de las acciones del capital social de Pablicorp. Pero no analizan estos temas para dirimir si es ficticio el conflicto colectivo, así como la garantía del predio, sino que manifiestan aberraciones jurídicas que no la sostiene ni un principiante en derecho.

5.3. La eficacia de la sentencia de Corte Constitucional frente a los órganos de la administración de justicia es de tal naturaleza que la Constitución faculta a destituir al funcionario que no la cumple, mas los jueces se consideran independiente para no acatarla y sostener lo contrario de lo resuelto. En este orden de ideas, la sentencia constitucional de esta causa expresamente dispuso que los jueces nacionales eviten violar la tutela judicial efectiva, las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, y mas concretamente debían motivar la sentencia, en virtud que los jueces nacionales no motivaron el fallo cuando no analizan la capacidad legal y el derecho de la señora María de Whitman para comprometer el inmueble de propiedad de Pablicorp a la luz de la sentencia de ex Quinta Sala de Corte Superior de Guayas. Mas en la sentencia de casación de 26 de abril de 2013 tampoco la motivaron, porque no analizaron la capacidad de la ex mandataria de Pablicorp María de Whitman a la luz de dicha sentencia, ni del ordenamiento jurídico y constitucional, por lo que incurrieron en las mismas violaciones constitucionales incurridas en la sentencia anterior.

5.4. La sentencia de casación respecto de los efectos de la sentencia de ex Quinta Sala de Corte Superior de Guayas manifiestan algo inédito y digno de admiración por la falta de conocimiento jurídicos y dicen: **¿Cuál es el alcance y efectos de la sentencia de la Quinta Sala de Conjueces de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil de 1 de septiembre del 2003 a las 10h00?** En primer término, se debe aclarar que tal sentencia contiene un pronunciamiento expreso relativo a la propiedad de la titularidad, propiedad de las 2.800 acciones nominativas de un mil sucres cada una en la Compañía Pablicorp S.A, que representan el 56% del paquete accionario, pero no contiene ningún pronunciamiento en cuanto a la propiedad de los activos, bienes o patrimonio de Pablicorp

A

S.A. Los derechos de Reynaldo Guerrero Gallardo, están contemplados en el Art. 114 de la Ley de Compañías, así como el ejercicio de tales derechos conforme las disposiciones de los Arts. 231, 245, 249, 250, 253 y 272 de la referida Ley; normas que contemplan las acciones legales que le corresponden al socio para impugnar los actos, resoluciones, acuerdos que hubieren adoptado la junta general de accionistas, así como los administradores o representantes legales de Pablicorp S.A., en especial sobre la designación de María Brito de Whitman como Presidenta de esa empresa y su participación en la suscripción del Acta Transaccional de 30 de junio de 1997, en cuanto la Ley de Compañías establece las acciones, procedimiento y competencia para conocer y resolver los conflictos societarios dentro de las compañías anónimas como Pablicorp S.A.”

5.5. Es fácil reparar en que los jueces confunden efectos de la sentencia y documentos con el ejercicio de los derechos, esto denota un escandaloso desconocimiento del derecho. El ordenamiento jurídico es concordante en este punto concreto de los efectos de la sentencia y de los instrumentos públicos que se presentan en juicio por ser lo medular del Derecho. Este error se corrobora en el auto de aclaración de la sentencia de 12 de mayo de 2013 en que expresan los derechos del accionista confundiendo con los efectos de la sentencia e instrumentos públicos. Adoptemos como punto de partida para interpretar los efectos de los documentos en general, el previsto en el Art. 147.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que exige y establece como requisito de validez que se cumpla los procedimientos establecidos en las leyes de la materia, y dice:

5.5.1. “Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original los archivos de documentos, etc., destinados a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. **Todo lo cual, siempre que cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia.** *Todas las disposiciones legales que, sobre la validez y eficacia en juicio de los documentos que se hallen contenidos en el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, Código Tributario y otros cuerpos legales, se interpretarán de conformidad con esta norma, salvo los casos de los actos y contratos en que la ley exige de la solemnidad del*

~~142 ciento cuarenta y seis~~
146-ciento cuarenta y seis 5 H H

instrumento público, en que se estará a lo prevenido por el Art. 1718 del Código Civil"

5.6. Los efectos de la sentencia ejecutoriada de Corte Superior de Guayas, a la luz del derecho, están establecidos en los Arts. 297 y 288 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Art. 97 ibidem y 948, 949 950, 951, 957 del Código Civil. De suerte que se extienden a la fecha de presentación de la demanda, 15 de octubre de 1996 y la suscripción del Acta Transaccional Laboral, 31 de mayo de 1997, por tanto, cuando suscribe el documento no representa a Pablicorp y sin derechos en la compañía para otorgar una garantía del predio que no le pertenece. En otras palabras, celebra el contrato transaccional sin poder de representación de la empresa, en cuyo caso el efecto legal es que no obliga a la compañía, por disposición del Art. 1998 del Código Civil que dice: "Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder suficiente, no la obliga respecto de terceros, sino subsidiariamente y hasta el valor del beneficio que ella hubiere reportado al negocio. Las disposiciones de este artículo comprenden aún al socio exclusivamente encargado de la administración" En este caso esa acta no causo beneficios sino perjuicios totales, porque a mas de robarse los ingresos del plantel educativo, se robaron el inmueble. Por consiguiente, esa acta transaccional no obligó a Pablicorp.

5.6.1. Respecto del considerando del fallo impugnado que dice: "tal sentencia contiene un pronunciamiento expreso relativo a la propiedad de la titularidad, propiedad de las 2.800 acciones nominativas de un mil sucres cada una en la Compañía Pablicorp S.A, que representan el 56% del paquete accionario, pero no contiene ningún pronunciamiento en cuanto a la propiedad de los activos, bienes o patrimonio de Pablicorp S.A." Los alcances los establece la ley, el Art. 297 del CPC prescribe: "PARA APRECIAR EL ALCANCE DE LA SENTENCIA, SE TENDRÁ EN CUENTA NO SOLO LA PARTE RESOLUTIVA, SINO TAMBIEN LOS FUNDAMENTOS OBJETIVOS DE LA MISMA" En la especie, los fundamentos objetivos de la cosa juzgada declara que Reynaldo Guerrero Gallardo compro el terreno con ingentes recursos de su peculio y de su esposa, por tanto, quedó

★

resuelto el dominio del inmueble a su favor, según la norma transcrita, corroborada por la doctrina y jurisprudencia.

5.6.2. Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Valor de los fundamentos. Pág. 428. **Los motivos o fundamentos del fallo pueden utilizarse ampliamente como elementos de interpretación de los pasajes poco claros de lo dispositivo del fallo. Es menester anticipar que la eficacia de la cosa juzgada se extiende necesariamente a aquellas cuestiones que han sido objeto de debate expreso en el juicio y que sin ser motivo de una decisión explícita, han sido resueltas implícitamente en un sentido o en otro, como antecedente lógico de la decisión. Ejemplo la condición de heredero cuando a este se lo demanda por una obligación del causante; si tal condición de heredero es negada, pero la sentencia decide en definitiva que existe tal condición y que, en consecuencia, debe pagarse la deuda, ese fallo, aunque sólo se refiera a la obligación, hace cosa juzgada en cuanto al estado civil, el que no podrá volver a debatirse de nuevo en otro juicio entre las mismas partes. En resumen, puede afirmarse que en principio, las premisas o considerandos del fallo no hacen cosa juzgada. Pero por excepción, adquieren esa autoridad cuando lo dispositivo se remite a ellos en forma expresa o cuando constituyen un antecedente lógico absolutamente inseparable de los dispositivo"**

5.6.3. Davis Echandía. Teoría General del Proceso. Pág. 459. **Límites Objetivos de la Cosa Juzgada. Puede decirse que la cosa juzgada, en cuanto al objeto se refiere, se extiende a todos aquellos puntos que sin haber sido materia expresa de la decisión de la sentencia, por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de tal decisión, resultan resueltos tácitamente. Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa de la materia de una nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto. Esto se enunciaba ya en el derecho romano con la formula pars in toto est (la parte está comprendida en el todo) por ejemplo si en la primera sentencia se dijo que el demandado no tenía derecho alguno sobre ninguna parte de un inmueble, sea en su resolución o en sus motivaciones que determina el**

~~#43 - ciento cuarenta y tres~~
~~#147~~
147 - ciento cuarenta y siete 14

alcance de la cosa juzgada, existirá ésta frente a una nueva demanda que reclama una parte..."

5.6.4. En la especie, la mayoría de las acciones del capital social de Pablicorp se adjudican a Reynaldo Guerrero Gallardo por haber proporcionado ingentes recursos para comprar el terreno y por haber financiado la empresa educativa, según la sentencia ejecutoriada, por tanto, estos fundamentos objetivos constituyen un antecedente lógico absolutamente inseparable de lo dispositivo de la sentencia y hacen cosa juzgada por disposición de la norma invocada. Puedo afirmar que la cosa juzgada, en cuanto al objeto se refiere, se extiende a este punto concreto del inmueble por estar comprendido en aquellos puntos que sin haber sido materia expresa de la decisión de la sentencia, pero por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de tal decisión, resultan resueltos tácitamente. En consecuencia, es indudable que la **sentencia contiene el pronunciamiento expreso de la propiedad de los activos, bienes o patrimonio de Pablicorp S.A. de modo explícito y forma parte de la cosa juzgada y no como resuelve la sentencia de casación.**

5.6.5. Adviertan señores jueces, que este derecho reconocido en la sentencia sobre el inmueble a favor de Reynaldo Guerrero se reputan derechos inmuebles, porque se ejerce sobre el inmueble, por disposición del Art. 597 del Código Civil. Este derecho confiere dominio sobre el terreno, al tenor de lo previsto en el Art. 600 CC, en tanto sobre las cosas incorporales también existe una especie de dominio. La sentencia confirió un derecho real en tanto éste requiere para que sea perfecto se produzca la tradición de la cosa que se debe y la sentencia se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad, Art. 595 y 1459 del CC. En consecuencia, el derecho de dominio de Reynaldo Guerrero termina el derecho del dueño anterior, como lo explica la jurisprudencia.

5.6.6. OBJETIVO DE TODA SENTENCIA (SEGÚN JURISPRUDENCIA).-
"OCTAVO.- Todo juicio o proceso tiene un objetivo; reconocer, declarar o crear un derecho; la sentencia emitida dentro de una causa crea derechos y obligaciones entre las partes en la calidad en que comparecen. En la especie, el **derecho de dominio de una de las partes termina al crear el derecho dominical a favor de otra; por manera que el objeto del proceso**

A

queda cumplido sin que terceras personas puedan alterar la relación procesal sin el necesario justificativo, interés o calidad respecto de la causa... ; NOVENO.- De conformidad con el Art. 301 del Código de Procedimiento Civil la sentencia ejecutoriada para el legítimo contradictor en la causa, surte efectos irrevocables y queda firme por no haber apelado de la sentencia de segunda instancia en recurso de casación para ante la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia... Registro Oficial 176 de 24 de septiembre de 2003.

5.6.7. En ese orden de ideas, la jurisprudencia conceptúa que la cosa juzgada debe ser respetada y fielmente cumplida, lo contrario daría lugar a la incertidumbre en la vida jurídica del debate judicial y su texto expresa: **"SEGUNDO.- La sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema que sirve de sustento a la presente acción, por imperio de la ley tiene que ser respetada y fielmente cumplida por haber pasado en Autoridad de Cosa Juzgada. Esta institución, la cosa juzgada, es una de las materias de mayor respetabilidad en el derecho procesal y significa que una vez discutido un litigio con las pruebas aportadas al mismo y, dictada sentencia firme y definitiva, las partes que resultaren desfavorecidas no pueden replantear nuevas pretensiones, debiendo respetar la decisión del tribunal, lo contrario daría lugar a la incertidumbre en la vida jurídica del debate judicial"** 2-V-90 - GJ XV N° 10 p. 3031.

5.7. En segundo lugar, otro efecto de la sentencia a la luz del derecho es la nulidad de la transferencia a Sorrento porque el fallo probó que la demandada no era dueña y por tanto su efecto es la invalidez del traspaso, según el Art. 1591 del Código Civil, que dice: **"El pago en que se debe de transferir la propiedad no es válida, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se deba transferir la propiedad sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar"** Es el caso de Pablicorp la ex mandataria señora de Whitman pago a sus empleados sus deudas laborales mediante el traspaso de la propiedad de la empresa, sin ser la dueña, sin consentimiento del dueño y sin facultad de enajenar, por tanto,

144 - ciento cuarenta y cuatro
148 - ciento cuarenta y ocho
sus efectos legales es que la transferencia no es válida y es absolutamente nula y sin eficacia jurídica.

5.8. En tercer lugar, otro efecto de la sentencia a la luz del derecho es que sirve para demostrar que la mandataria no obro dentro de los límites del mandato y la consecuencia legal es que la tradición es nula, por disposición del Art. 690 del Código Civil, que dice: **"Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además, que éstos obren dentro de los límites de su mandato o representación legal"** Es el caso de Pablicorp la ex mandataria no obro dentro de los límites de la representación legal, en tanto otorgó una garantía del predio de la empresa en el acta transaccional laboral, que no está comprendido en el mandato de representación, por tanto, no surte eficacia jurídica. En las sociedades anónimas, como Pablicorp, que tienen por objeto social el comercio, no se faculta al representante legal para que otorgue garantía del predio de su dominio para respaldar el pago de indemnizaciones de los empleados en caso de despido intempestivo de terceras personas, de acuerdo a los estatutos sociales y si fuere necesario otorgarlo por alguna razón, el Art. 253 de la Ley de Compañías obliga a obtener autorización de la junta general de accionistas. En consecuencia, en este caso no es válida la tradición, sino absolutamente nula.

5.9. Otro efecto legal de la sentencia es que sirve para probar que la tradición hecha por quien no es verdadero dueño de la cosa, invalida la tradición, según el Art. 698 ibidem, que dice: **"Si el tradente no es verdadero dueño de la cosa que se entrega por el o a su nombre, no se adquiere por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada"** La sentencia prueba que la ex mandataria no es verdadera dueña, por tanto, no transfiere derechos sobre el terreno. Esta norma tutela el dominio de los inmuebles para evitar que los estafadores dispongan de un predio que tiene legítimo dueño, a fin de que los jueces honestos resuelvan restituirselo al titular del derecho, como es en el presente caso, no obstante, los jueces de casación deciden contra derecho y da la razón a los usurpadores.

5.10. Otro efecto de la sentencia respecto de la garantía otorgada en el Acta Transaccional es que prueba que la ex mandataria no tiene

★

capacidad para otorgar esa garantía el predio de Pablicorp, por no tener facultad para enajenar ni haberlo otorgado con los requisitos necesarios para la enajenación, en tal virtud, no habrá acción personal contra el dueño, esto es, no obliga a la empresa, según el Art. 2316 del Código Civil, que dice: ***"Capacidad.- No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para la enajenación. Pueden obligarse con hipoteca los bienes propios, para seguridad de una obligación ajena; pero no habrá acción personal contra el dueño, si éste no se ha sometido expresamente"***

5.11. Independientemente de los efectos de la cosa juzgada de Pablicorp en el Acta Transaccional, la sentencia de Pablicorp resuelve que el documento es válido para ejecutarlo ante el Inspector del Trabajo y dice: "En primer término corresponde indicar el proceso que dio como resultado que el bien objeto de la acción reivindicatoria dejara de pertenecer al patrimonio de Pablicorp S.A. y pasara al dominio de Fideicomiso Mercantil Sorrento S.A., tiene como antecedente un Acta Transaccional celebrada el 30 de junio de 1997 ante la Subdirectora de Mediación Laboral de la Dirección del Trabajo del Litoral, dentro de un proceso de mediación previo a un conflicto colectivo de trabajo, acorde a lo previsto en el actual Art. 470 del Código del Trabajo, entre la ACADEMIA INTERNACIONAL WALT WHITMAN, como la parte patronal, que actuó por intermedio de Staley James Whitman, Director General de la Empresa Educativa Academia Internacional Walt Whitman y Director Ejecutivo de la Compañía Walt Withiman Academia Internacional C.A.; María Brito de Whitman, como Presidente Ejecutiva de Pablicorp S.A. y Walter Brito Palis, como Apoderado General de María Polis Zambrano; y por la parte trabajadora, el Comité Especial de Trabajadores de la Academia Internacional Walt Whitman. Este acuerdo estableció principalmente lo siguiente: 1) La parte patronal estuvo representada por las personas jurídicas y natural antes mencionadas, entre ellas Pablicorp S.A., en calidad de socios de la Academia Internacional Walt Whitman, todos ellos como responsables solidarios por las obligaciones frente a los trabajadores de esa institución educativa, acorde a lo previsto en el actual Art. 41 del Código del Trabajo. 2) En la cláusula tercera del Acta Transaccional se acordó conferir a los trabajadores de la Academia Internacional Walt Whitman una estabilidad mínima de cuatro años. 3) En tanto que en la cláusula cuarta se determinan los casos en que se estiman se habría violado este garantía de estabilidad; la condición de crédito privilegiado del Acta Transaccional; el procedimiento para la liquidación y pago de los haberes de los trabajadores; las medidas cautelares o de apremio para hacer efectivo el pago, confiriendo al Inspector del Trabajo potestad para la ejecución a través del embargo, remate y adjudicación de bienes de propiedad de la Academia Internacional

~~145- ciento~~

~~145- ciento~~ ¹¹ y cinco

149- ciento
ciento
y noventa

Walt Whitman o de cualquiera de las personas naturales o jurídicas socias de esa institución educativa, en forma conjunta o individual.- Así ocurrió cuando según obra de las copias certificadas del proceso de remate y adjudicación de fs. 158 a 172 del cuaderno de primer nivel, los trabajadores de la Academia Internacional Walt Whitman, ante un evento que estimaron atentaba a su garantía de estabilidad laboral, concurrieron ante el Inspector del Trabajo del Guayas para ejecutar sobre el bien de propiedad de Pablicorp S.A., terreno de 44 hectáreas ubicado en el Km 20 de la Vía a la Costa, el cual fue embargado, rematado y adjudicado a los trabajadores que se mencionan en el auto de adjudicación de 24 de enero del 2006, a las 09h10. Esta adjudicación fue objeto de cesión de derechos por parte de los trabajadores adjudicatarios a favor del Fideicomiso Mercantil Sorento S.A."

5.11.1. Esta Acta Transaccional no tiene valor jurídico alguno a la luz del derecho, porque sólo tienen ese valor las Actas Transaccionales celebradas conforme al Art. 468 y 469 del Código del Trabajo, por disposición del Art. 489 ibidem , que dice: **"Efectos de los fallos ejecutoriados.- Las condiciones a las cuales deben sujetarse las relaciones laborales, según los contratos colectivos y según las actas a la que se refieren los artículos 468 y 502 de éste Código, tienen el mismo efecto, generalmente obligatorio, que los contratos colectivos de trabajo"** Por su parte, el Art. 468 dice: **"Pliego de Peticiones.- Suscitado un conflicto entre el empleador y sus trabajadores, estos presentarán ante el Inspector del Trabajo, su pliego de peticiones concretas. La autoridad que recibe el pliego de peticiones notificará dentro de veinticuatro horas al empleador o a su representante, concediéndole tres días para que conteste."** El conflicto del trabajo termina con la suscripción del Acta ante la misma autoridad, de acuerdo con el Art. 469.- **"Terminación del conflicto.- Si la contestación fuere favorable a las peticiones de los trabajadores, se extenderá un acta firmada por las partes, ante la misma autoridad, y terminará el conflicto"**

5.11.2. En resumen, las actas transaccionales para que tengan el efecto de generalmente obligatorias requieren que cumpla el procedimiento establecido en la ley de la materia, en la especie el Acta Transaccional está suscrita por la Subdirectora de Mediación Laboral, vale decir, no está firmado por el Inspector del Trabajo, por tanto, no es válido por no cumplir el procedimiento señalado; no es consecuencia de un conflicto colectivo de trabajo, pues los trabajadores no presentaron

A

demanda de conflicto colectivo al Inspector del Trabajo, ni éste notificó al empleador para que la conteste, ni el empleador la contestó dentro de los tres días, ni el Inspector suscribió el acta ante las partes, como disponen las normas transcritas. En consecuencia, no tiene valor de prueba legal al tenor de lo previsto en el Art. 147.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia el Art. 1716 y 1717 del Código Civil que regula la prueba de las obligaciones y el Art. 76.4 de la Constitución de la República, que declara que la falta validez alguna y la ineficacia probatoria de las pruebas actuadas con violación de la Constitución o la ley. También se violó el Art. 326 numerales 11 y 12 de la Constitución de la República, en tanto confiere competencia para juzgar los conflictos colectivos de trabajo a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, pero en la especie solo intervino la Subdirectora de Mediación Laboral sin mediar conflicto colectivo y sin competencia alguna en Constitución y en la Ley.

5.11.3. Los fundamentos objetivos de la sentencia de casación reconoce tácitamente que el Acta Transaccional carece de valor legal cuando expresa el plazo de la vigencia del acta, de lo que se infiere que cuando se ejecuto ya estaba prescrita por mandato imperativo de la ley, y dice: **"2) En la cláusula tercera del Acta Transaccional se acordó conferir a los trabajadores de la Academia Internacional Walt Whitman una estabilidad mínima de cuatro años."** La suscripción del acta transaccional es suscrita el 30 de junio de 1997, por tanto, tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2001, pero la demanda de visto de bueno de una empleada con el que se inicia el conflicto colectivo, es del 2002, esto es, cuando estaba prescrita y no tenía eficacia jurídica. Por esta razón el Inspector del Trabajo consulta al Director Regional del Trabajo (que es actual Juez de la Corte Nacional de Justicia) si el acta se encuentra prescrita y éste absuelve la consulta y expresa que el acta se encuentra prescrita; por este motivo el Inspector declara en providencia definitiva la nulidad del proceso y reconoce que no tiene competencia para resolver y dispone su archivo. Según consta en las pruebas del proceso, en la copia certificada del proceso laboral incorporado al juicio. Adviertan, señores jueces, que el Art. 637 del Código del Trabajo establece que transcurrido 5 años desde que la obligación se hizo exigible, no se aceptará motivo alguno de suspensión y toda acción se declarará prescrita. De esta manera pruebo que el Acta Transaccional no

#46 ciento cuarenta y seis H 13 150- ciento cincuenta

sirve desde cualquier punto de vista jurídico que se lo analice porque es un documento forjado para robarse todo, pero de manera burda y torpe.

5.12. Si se declaró nulo el proceso laboral, ¿Cómo se remató el inmueble? Es el caso, señores jueces, en un documento forjado que manifiesta que la Ministra del Trabajo la suscribió, pero suscrita por una persona que no trabaja en esa entidad pública, sin embargo consta como secretaria ad hoc, revoca el auto de nulidad del Inspector del Trabajo, sin que las partes hubieran apelado y sin que la Ministra tenga competencia en la ley para resolver un conflicto colectivo. En base de este otro documento forjado se remata al inmueble. Es decir, que en base a dos documentos forjados se remata un inmueble, esta es la razón por la cual la sentencia de la Corte Constitucional expresa que es una supuesta garantía y es un supuesto conflicto colectivo de trabajo, sin embargo, los jueces los consideran válido, como si no supieran lo que es un instrumento público. Esto prueba el divorcio absoluto de la sentencia de casación con las pruebas del proceso de este juicio.

5.13. En otra parte de la sentencia de casación desechan el recurso de la actora por cuanto consideran que son meras discrepancias los cargos de falta de motivación de la sentencia de Corte Superior, que se sustenta en el Art. 933 del Código Civil para desechar la acción reivindicatoria, pero igualmente carece de motivación. El fallo dice: "de la *revisión del fallo de 9 de septiembre del 2009 de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en especial del considerando Tercero de ese fallo, se determina que el mismo se sustenta en la norma del Art. 933 del Código Civil, específicamente sobre el análisis de los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria; consecuentemente, no se observa violación de la norma el Art. 274 del Código Procesal Civil, pues la discrepancia sobre los criterios de juzgamiento no implican que se ha incurrido en omisión de sustentar el fallo en la ley.*" ... En base a estas consideraciones, se desecha el cargo por la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.-

5.13.1. Se aprecia la falta de motivación de la decisión en tanto no explica porque es aplicable la norma a este caso, si realmente no es aplicable y mas bien es el fundamento de la procedencia de la acción. Es otra falacia monumental porque esa afirmación contraviene todo el ordenamiento jurídico como lo demostraré.

5.13.2. El orden jurídico y constitucional del País establece con absoluta claridad que la persona que tiene inscrito su título es dueño

A

excepto en el caso en que la venta la hace por quien no es verdadero dueño, en cuyo caso, el titular del derecho tiene la acción para reivindicar y recuperar el dominio del inmueble. Las normas de derecho que disponen que el dueño tiene derecho a proponer la acción de dominio para recuperar el predio perdido son: El Art. 933 del Código Civil prescribe: "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela" ¿Quién es el dueño de una cosa singular? El Art. 741 *idem*, dice: "Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con el ánimo de hacerla suya, menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan"

5.13.3. El dueño de una cosa singular es quien tiene justo título de dominio, por haberlo adquirido por medio de un título traslativo de dominio y de buena fe, conforme a lo dispuesto en los Arts. 703 y 712 *ibidem*, y no lo pierde en los casos que las leyes expresamente exceptúan. En otras palabras, el derecho de dominio y posesión inscrita no se pierden en los casos que las leyes expresamente exceptúan.

5.13.4. ¿Cuales son los casos que las leyes expresamente exceptúan que no se deja de poseer una cosa por haberse apoderado otro con ánimo de señor y dueño? En primer lugar, el caso de la tradición hecha por quien no es dueño de la cosa, según el Art. 698 *ibidem*, que dice: "Si el tradente no es verdadero dueño de la cosa que se entrega por el o a su nombre, no se adquiere por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada"

5.13.5. Esta norma es fundamental en la tutela del dominio de los inmuebles para evitar que los estafadores dispongan de un predio que tiene legítimo dueño. En segundo lugar, el Art. 1591 *ibidem*, dice: "El pago en que se debe de transferir la propiedad no es válida, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se deba transferir la propiedad sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar" Es el caso de Pablicorp, en tanto la ex mandataria señora de Whitman pago a sus empleados deudas laborales mediante el traspaso de la propiedad de la empresa sin autorización del dueño, por tanto, sus efectos legales es que la transferencia no es válida, por elemental sentido común.

~~147 ciento veinte y siete~~
157 ciento cincuenta y un
15
4 un
sp

5.13.6. En tercer lugar, el Art. 690 ibidem, dice: **"Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además, que éstos obren dentro de los límites de su mandato o representación legal"** Es el caso de Pablicorp la ex mandataria no obro dentro de los límites de la representación legal, pues otorgar una garantía del predio de la empresa en el acta transaccional laboral, no está comprendido en el mandato de representación, por tanto, no surte eficacia jurídica. Tanto es así que en las sociedades anónimas como Pablicorp, que tienen por objeto social el comercio, no se faculta al representante legal que otorgue garantía del predio de su propiedad para respaldar el pago de indemnizaciones por despido intempestivo de empleados de otra empresa y en caso que tenga que otorgarse por alguna necesidad, se requiere de autorización de junta general de accionistas, por disposición del Art. 253 de la Ley de Compañías. En consecuencia, en este caso no es válida la tradición.

5.13.7. En conclusión, Pablicorp, se encuentra en los casos en que las leyes expresamente exceptúan, en tanto la tradente - ex mandataria de Pablicorp celebra un Acta Transaccional con sus empleados en virtud del cual se remate el inmueble - sin ser verdadera dueña de la cosa que se entrega, por ello la transferencia no es válida, ni tuvo el consentimiento del dueño - la junta general de accionistas - para transferir la cosa que sirvió de pago a los empleados y, por último, sin tener la representación legal de la compañía por haber perdido el juicio de la propiedad de la mayoría de las acciones del capital social de Pablicorp, según la sentencia ejecutoriada de Corte Superior de Guayas y, por ende, no haber obrado dentro de los límites de la representación. Por consiguiente, no se transmitieron los derechos de Pablicorp, y no es válida la tradición del inmueble y la legítima dueña es Pablicorp.

5.13.8. Estos mismos fundamentos legales los utiliza la jurisprudencia vinculante de casación reseñada en escrito anterior: Gaceta Judicial N° 15 Serie XVII, pág. 5045 a 5052; Gaceta Judicial N° 1 Serie XVIII, pág. 55 a 60; Gaceta Judicial N° 4 Serie XVII, pág. 938 a 940. Queda demostrado que ninguna parte del fallo se encuentra motivado, como lo he demostrado en líneas anteriores. La doctrina de los grandes tratadistas del derecho, como Claro Solar, en Explicaciones del Derecho Civil Chileno y Comparado,

A

explican son absoluta claridad el derecho a reivindicar, como si fuera un alegato de Pablicorp y dice: "Si el demandante y el demandado hacen valer títulos de propiedad y si los títulos emanan de autores diferentes, el reivindicador deberá triunfar si prueba que en la hipótesis de un proceso entre los autores de esos títulos, el suyo habría triunfado, ya que el demandado no habría podido transferirle mas derechos que los que él tenía, y por el contrario, perderá el juicio si no logra rendir esta prueba. El Juez puede atribuir el valor de una presunción, no solamente a los títulos de propiedad, sino a las sentencias recaídas en juicios anteriores, aunque no haya figurado en ellas el reivindicador o el poseedor, a recibos de los impuestos, a contratos celebrados con otras personas relativas a la cosa a que el juicio se refiere y que permitan suponer que el reivindicador o poseedor, o sus autores, han debido ser considerados propietarios"

5.14. ¡Qué principios constitucionales se han violado en este proceso! Pues la tutela judicial efectiva, prevista en el Art. 75, es la primera en tanto se considera tal cuando los fallos no se resuelve conforme a la normativa vigente y no se reconocen los derechos garantizados por la Constitución y la ley, de tal manera que establece que el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En este caso se encuentra la sentencia de la Corte Constitucional de este juicio, que es incumplida por la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia, por lo que es menester que se imponga una drástica sanción a los jueces para que cumplan los mandatos de las resoluciones judiciales.

5.15. Esta violación también comprende las garantías del debido proceso establecidas en el Art. 76, número uno, en virtud del cual el tribunal de casación debía asegurar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, pero que la violaron en esta sentencia de casación. Se violó la garantía prevista en el número 4 del Art. 76, en tanto el Acta Transaccional es una prueba obtenida o actuada con violación de la Constitución y de la ley y en cuanto la resolución de la Ministra de Trabajo que revoco el auto definitivo de nulidad del proceso laboral es otra prueba

~~118- ciento ochenta y ocho~~
152- ciento cincuenta y dos 17 ~~ochenta y dos~~ A

obtenida o actuada con las mismas violaciones, por ello no tienen validez alguna y carecen de eficacia probatoria.

5.16. Se violo el derecho a la defensa, prevista en el N° 7 del Art. 76, en especial el derecho a la motivación, prevista en la letra l del número 7, en razón de que no se explica la pertinencia de aplicación de las normas de derecho a los antecedentes de hecho en la sentencia de casación, razón por la que adolece de nulidad, por mandato de la regla constitucional. Se violo el derecho a ser juzgado por un juez sin competencia en el remate, se juzgo a Pablicorp por el Inspector del Trabajo basado en un documento forjado, el Acta Transaccional, cuando la competencia es del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y en base a otro documento forjado, el de la Ministra del Trabajo, se revoca la nulidad del juicio laboral, derechos garantizado en el derecho a la defensa de la letra k) del N° 7 del Art. 76 de la Constitución de la República.

6.- PRETENSION.- Presupuesto tales antecedentes demando la acción extraordinaria de protección en calidad de Presidenta Ejecutiva de Pablicorp S.A. en contra de las sentencias de 26 de abril del 2013 y auto de aclaración de 12 de mayo de 2013 de la Sala Civil de la Corte Nacional de justicia, de la sentencia de 9 de septiembre del 2009 de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y de la sentencia de 14 de marzo de 2008 del Juez 9° de lo Civil de Guayaquil para que se las deje sin efecto por violar la tutela judicial efectiva del Art. 75, y las garantías del debido proceso del Art. 76 números 1, 3, 4, 7 letras k y l, de la Constitución de la República, además el derecho a la seguridad jurídica prevista en el Art. 82 ibidem, se vulnera los principios del derecho del trabajo previstos en el artículo 326 números 11 y 12. En consecuencia, se declare vulnerado el derecho de Pablicorp S.A. en el terreno materia del litigio, y se disponga la reparación integral que comprenda que los titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera mas adecuada posible, para ese efecto se disponga la cancelación de la inscripción de las transferencias de dominio, los gravámenes y limitaciones al dominio que se hayan inscrito en el Registro de Propiedad a partir de la inscripción de la demanda en el registro de propiedades, esto es, desde el 17 de septiembre de 2007, para que se

A

restablezca la situación anterior a la violación, conforme lo preceptúa el Art. 18 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el Art. 1000 del Código de Procedimiento Civil. La reparación debe incluir fundamentalmente la restitución del derecho, de tal manera que la Corte Constitucional disponga que el Registrador de Propiedad cumpla con sanear el predio de toda turbación del derecho a Pablicorp por parte de Sorrento y cancele las turbaciones referidas; también la compensación económica y patrimonial, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, de modo que no se vuelva a juzgar el derecho del predio por parte de otro tribunal de justicia, las medidas de reconocimiento como son que el predio del Km. 21 vía al a la costa no le pertenece a Sorrento sino a Pablicorp y las disculpas públicas por parte de Sorrento, conforme a lo previsto en la norma invocada. La compensación económica y patrimonial comprenda el daño material e inmaterial que comprende la compensación por las pérdidas o detrimento del ingreso de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tenga nexo causal con los hechos del caso. También reclamo los daños inmateriales ocasionados al tenor de la norma invocada.

7.- CASILLERO CONSTITUCIONAL.- Señalo casillero constitucional para las notificaciones de ley, el signado con el N° 175 y la página de internet copyguerrero@hotmail.com.

A ruego de la peticionaria y como su defensor autorizado.

Atentamente.


Dr. Hugo Amir Guerrero.

Reg. 1387 Guayas.

29/05/13
14/05/14
Recibido en esta Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, el día de hoy veinte y nueve de mayo de dos mil trece, a las catorce horas, cincuenta y cuatro minutos.- Con copia.- Certifico.-


Dra. Lucía Toledo Puebla
Secretaria Relatora